

C.A. de Protección.

Concepción, dieciocho de julio de dos mil veintitrés.

Visto:

Se reproduce la sentencia en revisión, excepto sus motivos 9° a 24, los que se eliminan, y se tiene, en su lugar además, presente:

1°.- Que el apoderado de la demandada apeló de la sentencia definitiva que acogió la demanda, solicitó su revocación y que se rechace la demanda y, en subsidio, se rebaje el monto de la indemnización.

Funda su recurso en que el fallo le causa agravio al rechazar las excepciones de reparación integral por ya haber sido indemnizado el actor y de prescripción. Añade que el monto de la indemnización por daño moral resulta excesivo en relación a las sumas fijadas en los casos en que las demandas han sido acogidas por causas de prisión política y tortura, todo ello según detalla.

2°.- Que la apoderada del demandante también apeló de la sentencia definitiva y solicitó su confirmación con declaración que se aumente el monto indemnizatorio concedido a la suma que indica en escrito de folio 40 y por las razones que explica en él.

3°.- Que la acción civil es accesoria en el juicio penal; la responsabilidad civil no emana del delito penal, sino de la concurrencia de los respectivos requisitos y aquella pertenece única y exclusivamente al ámbito patrimonial, encontrándose, por lo tanto, regida por el Derecho Civil o común, toda vez que el Derecho Internacional no excluye la aplicación del ordenamiento nacional sobre esta precisa materia, particularmente las reglas contenidas en los artículos 2497 y 2332 del Código Civil, que regulan la institución de la prescripción en el área de la responsabilidad civil extracontractual, que es la que se debate en este caso (Corte Suprema, rol 10.665-2011).

4°.- Que la Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad de la acción civil acogida en primera instancia. En efecto, su artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna y su artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido.

A su vez, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes



protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de sus artículos 129 y 130, que aluden a actos contra las personas o bienes, citando al efecto al homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar a propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio.

Finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.

5º.- Que la prescripción constituye una institución destinada a garantizar la seguridad jurídica y, como tal, opera en todo el ordenamiento jurídico, salvo que por norma expresa de la ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones (v.gr. Arts. 937, 1317 Código Civil). A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia.

6º.- Que el artículo 2497 del Código Civil preceptúa que “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Así las cosas, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la que las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.



7°.- Que los ilícitos en que se sustenta la acción de autos, ocurridos en el año 1973, adquieren certeza y publicidad a partir del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, toda vez que el demandante aparece en la nómina de dicho informe (N° 878, folio 29), por lo que sólo partir de entonces ha de comenzarse a contar el plazo de prescripción que establece el artículo 2332 del Código Civil.

Así, habiéndose dado noticia del mencionado informe de la denominada Comisión Valech II, en 2011, el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria de autos se encuentra ampliamente cumplido, ya que a la fecha de notificación de la demanda de autos -24 de septiembre de 2019 (folio 4)- transcurrió en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil; por lo que la excepción de prescripción extintiva opuesta, debe ser acogida y en consecuencia la demanda rechazada.

8°.- Que el demandante ha tenido motivos plausibles para litigar por lo que no será condenado en costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1698 y 2332 del Código Civil, 144, 146 y 186 del Código de Procedimiento Civil; **se revoca** la sentencia apelada de dos de junio de dos mil veintidós, contenida en el folio 37 que rechaza la excepción de prescripción extintiva, acoge la demanda de autos y se decide que se acoge la excepción de prescripción y, en consecuencia, se rechaza la demanda de autos, todo lo anterior sin costas.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Rodrigo Cerda San Martín, quien fue de opinión de confirmar la sentencia en alzada con declaración que se eleva el monto indemnizatorio a la suma de sesenta millones de pesos, en virtud de los propios fundamentos del fallo en revisión y teniendo además presente que los hechos acreditados en el proceso constituyen perjuicios no patrimoniales, ciertos, actuales, reales y comprobados, bajo la forma de “*pretium doloris*” y una pérdida de agrado de vivir por las consecuencias de las torturas a las que fue sometido el actor.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redactó Camilo Álvarez Órdenes, ministro titular.

Rol civil 1.539-2022 y acumulada 1.540-2022.-





GJXCXGXQXJM

Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por los Ministros (as) Rodrigo Cerda S., Camilo Alejandro Alvarez O. y Abogado Integrante Gonzalo Javier Montory B. Concepcion, dieciocho de julio de dos mil veintitrés.

En Concepcion, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

